

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 30 º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-18708-2023
CARATULADO : MUSSA/FISCO DE CHILE

Santiago, diez de febrero de dos mil veinticinco

VISTOS:

Con fecha 7 de noviembre de 2023 comparece don Felipe Daniel González Berríos, abogado, mandatario judicial, domiciliado en Paseo Estado N° 215, oficina 806, comuna de Santiago, Región Metropolitana, en representación convencional de don **Sebastián Alberto Mussa Rodríguez**, pensionado, domiciliado en Pasaje Tolón N° 439, Villa Pedro Lagos, comuna de Arica, Región de Arica y Parinacota, interponiendo demanda civil de indemnización de perjuicios por la comisión de crímenes de lesa humanidad, en contra del **Fisco de Chile**, persona jurídica de derecho público, representado legalmente por el Presidente del Consejo de Defensa del Estado, don Raúl Sergio Letelier Wartenberg, domiciliado en calle Agustinas N° 1225, piso 4, comuna de Santiago, Región Metropolitana.

Expone que es un hecho de público conocimiento que el 11 de septiembre de 1973 es derrocado el gobierno constitucional del presidente Salvador Allende Gossens, tomando el poder un régimen de facto que se extendería por casi 17 años, caracterizado por una situación de violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos, violencia política, jurídica y social de la que fueron víctimas cientos de miles de personas, tales como detenciones ilegales y secuestro, tortura, violaciones y diversos maltratos sexuales, desaparición forzada de prisioneros, ejecuciones de opositores, asesinatos con fines de intimidación pública, actos de terrorismo de Estado contra opositores en el extranjero, trabajos forzados y otros tratos crueles a prisioneros, detenciones masivas y represión



indiscriminada de personas y, uso indiscriminado de armas de fuego contra manifestantes civiles, entre otros.

En cuanto al relato del actor, señala lo siguiente:

“Para la época del golpe de estado era estudiante, miembro de la izquierda cristiana y simpatizante del gobierno de la Unidad Popular. Por esta razón fui detenido el 04 de noviembre de 1974 en la plaza de armas de Rengo, mientras participaba de una conversación con amigos, teniendo apenas 18 años, es decir, era menor de edad. Se me imputó que participaba de reuniones clandestinas que atentaban contra la seguridad nacional, quedando en libertad recién el 11 de noviembre del mismo año. En mi detención pasé por la Comisaría de Rengo, lugar en donde fui duramente golpeado por funcionarios, quedando en muy malas condiciones físicas en una estrecha celda. Al día siguiente pasé a la Fiscalía Militar de Rancagua, donde permanecí incomunicado en una oscura celda y sometido a tortura por funcionarios de la DINA en un recinto que no pude reconocer, pasando finalmente la cárcel de Rancagua, donde permanecí recluido por 4 días y posteriormente dejado en libertad en la noche del día 11 de noviembre. Al retornar a Rengo, sufrí la persecución y acoso constante por parte de Carabineros, estuve detenido en varias oportunidades sin razón alguna, solo falsas acusaciones verbales ya que jamás se comprobó delito alguno, durante varias semanas fui vigilado por personal de civil, lo que me ocasionó graves problemas psicológicos, cayendo en un estado depresivo y de auto aislamiento por la inseguridad que estaba viviendo. En el mes abril del año 1975 decidí dejar esta ciudad para radicarme de forma definitiva en la ciudad de Arica.

Las secuelas de toda esta persecución marcaron mi vida para siempre, me vi obligado a abandonar todo mi núcleo cercano para escapar de las vejaciones constantes de parte de Carabineros, debiendo rearmar mi vida de forma definitiva en otra ciudad, lo que me



afectó emocionalmente para siempre. Por otro lado, los malos tratos físicos dejaron huellas en mi cuerpo para siempre.

Finalmente fui reconocido por el Estado de Chile como víctima directamente afectada por violaciones a los derechos humanos, que fueron individualizados en la “Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas”, en el anexo elaborado por la Comisión Nacional sobre Prisión, Política y Tortura, del año 2010. Mi registro como víctima es el N° 5882, Valech II.”

Expone que los autores de estos hechos son agentes del Estado, que formaban parte del Ejército de Chile, Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones, que organizados, desarrollaron una política criminal al amparo de un régimen político dictatorial, cuyo origen ilegítimo se produce en el contexto de un golpe de estado ocurrido el 11 de septiembre de 1973, todos los agentes que participaban de las sesiones de tortura tenían la calidad de funcionarios públicos o agentes del Estado en cuanto eran miembros de las Fuerzas Armadas. En virtud de esta condición cabe responsabilidad civil al Estado de Chile, la que de conformidad a la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, indica que será responsable por los daños que causaren los órganos de la administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren afectar al funcionario que las hubiere ocasionado.

Afirma que existe responsabilidad extracontractual cuyo origen es un hecho ilícito a raíz del cual se ha originado un daño, existiendo relación de causalidad entre la acción del funcionario público y el daño producido, debido a la comisión de un delito de lesa humanidad.

En cuanto a los fundamentos de derecho, exponen las siguientes alegaciones:

Afirman que los hechos relatados configuran graves violaciones a los derechos humanos, consistentes en crímenes de lesa



humanidad, entre otros de tortura y persecución, vulnerándose todos los instrumentos internacionales que consagran el derecho a la vida y a la integridad personal, principalmente la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del hombre, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes de Naciones Unidas, los Convenios de Ginebra de 1949, la Convención para la prevención y sanción del delito de genocidio, entre otros.

Expone que son agentes del Estado quienes han realizado las conductas ilícitas. Aquí la responsabilidad nace al momento de la comisión del ilícito atribuible al Estado y, por ello, nace la obligación de reparar el daño causado, siendo éste un principio básico del derecho internacional.

Luego, la reparación, es un término genérico que comprende las diferentes formas en las que el implicado puede hacer frente a la responsabilidad internacional en que ha incurrido, ya sea, restitución, indemnización, satisfacción y garantías de no repetición, con toda la finalidad debe ser la plena restitución del daño.

Ahora bien, la responsabilidad del Estado encuentra su fundamento en las nombras de derecho público, y en primer término, en la Constitución Política de la República. Así, el artículo 38 inciso 2° de la Constitución dispone que toda persona que sea lesionada en sus derechos por la Administración del Estado puede recurrir ante los Tribunales de Justicia a objeto que el daño causado sea resarcido, consagrando una acción constitucional para hacer efectiva la responsabilidad del Estado.

Indica que el fundamento básico de esta responsabilidad extracontractual del Estado, está en diversas disposiciones constitucionales y legales, tales como el artículo 1° inciso 4°, 5° inciso



2°, 6° y 7° de la Constitución Política de la República y el artículo 4° de la Ley N° 18.575 sobre Bases Generales de la Administración del Estado.

Señala que el Estado de Chile ha reconocido su responsabilidad en estos hechos de forma expresa a través del informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación donde queda constancia de la sistematicidad de las graves violaciones a los derechos humanos y la represión, reconociéndolo como víctima de tortura.

Manifiesta que el concepto de crímenes de lesa humanidad requiere un contexto de violencia organizada que permite diferenciarlos de aquellos actos delictivos que consisten en la mera lesión de bienes jurídicos individuales. En ese sentido, el demandante fue víctima del delito de tortura, esto es, todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de él o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infringidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia.

Añade que la tortura se configura por la concurrencia de tres requisitos: a) la causación de sufrimiento; (b) por la participación de agentes estatales o para estatales, y; (c) que esta sea cometida con determinados fines a saber: obtener de la víctima o de un tercero información o una confesión, castigar a la víctima o un tercero por un acto que haya cometido o se sospeche que haya cometido.

Expone que las violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos ejecutadas en el cumplimiento de una meticulosa política terrorista del Estado produjeron un considerable, indeleble,



profundo y extenso daño moral que ha marcado para siempre ha quienes sufrieron tal experiencia. En este sentido, el daño moral no se encuentra definido en el Código Civil, sin embargo, la doctrina lo considera como el resultado de la lesión a un interés del demandante. De este modo, el daño moral alude correctamente a la lesión de bienes como el honor o la privacidad, pero también expresa imperfectamente otros daños no patrimoniales de significación, como por ejemplo el dolor físico, la angustia psicológica o la pérdida de oportunidades para disfrutar de la buena vida.

Sostiene que la indemnización por daño moral y la acción para obtener tal indemnización están comprendidas en la reparación integral del daño causado a las víctimas de delitos de lesa humanidad. La indemnización de daño moral, se encuentra en el hecho de que además de los daños físicos y materiales sufridos, se encuentra un daño moral directo derivado de las siguientes circunstancias que rodearon el hecho fundamental del golpe de Estado: a) amenazas; b) incomunicación; c) persecuciones; d) exoneración laboral; e) negativa de acceso a la información; f) inseguridad; g) presiones y daños psicológicos; h) alteraciones del sueño; i) aislamiento social; j) pérdida de oportunidades, en particular de empleo, educación y prestaciones sociales; k) otras secuelas en el seno de la familia, como separaciones forzosas de largo tiempo; separaciones definitivas, destrucción de la familia, daños que permanecen incólumes pese al transcurso del tiempo.

En definitiva, el derecho a una reparación integral es un derecho reconocido por el derecho internacional y derivado del bloque constitucional de derechos humanos chileno, en tal sentido, al no poder volver las cosas al estado anterior a la vulneración de los derechos, queda la opción de repararla. Por esta razón, por concepto de daño moral, se solicita la suma de \$150.000.000 (ciento cincuenta millones de pesos), a fin de intentar compensar el sufrimiento causado por el secuestro, tortura física y psicológica, sufriendo represión



política y persecución durante la dictadura, por el sufrimiento grave y la angustia que esta experiencia le ha causado al actor.

Ahora bien, indica que la acción destinada a la obtener la indemnización de perjuicios derivados de la comisión de delitos de lesa humanidad es imprescriptible al igual que la acción penal, siendo la excepción a la institución de la prescripción extintiva. Esta imprescriptibilidad se basa no sólo en el derecho internacional sino también en principios de carácter interno, internacional y por la misma jurisprudencia de la Corte Suprema.

Concluye señalando que en la especie concurren todos los requisitos que obligan al Estado a indemnizar los perjuicios causados, estos son: a) existencia de una acción u omisión de un órgano del Estado; b) existencia de un daño; c) nexo causal, y; d) no existen causales de justificación que eximan al Estado de su responsabilidad.

Finalmente, y previas citas legales, solicita tener por interpuesta acción civil de indemnización de perjuicios por la comisión de crímenes de lesa humanidad, en contra del Fisco de Chile, representado legalmente por el presidente del Consejo de Defensa del Estado, don Raúl Letelier Wartenberg, todos ya individualizados, acogerla a tramitación y, en definitiva, acogerla en todas sus partes, disponiendo:

1. Condenar expresamente al Estado de Chile a pagar al actor a título de indemnización de perjuicios por el daño moral sufrido causado por los crímenes perpetrados en su contra, la suma de \$150.000.000 (ciento cincuenta millones de pesos), más reajustes de acuerdo a la variación del índice de precios al consumidor, e intereses que la cantidad devengue desde la notificación de esta demanda y hasta el pago efectivo y total de la misma, o la suma que el Tribunal estime ajustada a derecho, justicia y equidad, al mérito de autos;
2. Que en todo evento se condene expresa y ejemplarmente al demandado al pago de las costas de esta causa.



Con fecha 1 de diciembre de 2023, se notificó al demandado de conformidad a lo dispuesto en el artículo 44 del Código de Procedimiento Civil.

Con fecha 22 de diciembre de 2023, el Consejo de Defensa del Estado, por el Fisco de Chile, contestó la demanda, solicitando el rechazo de dicha acción con costas; o, en subsidio, rebajar sustancialmente el monto indemnizatorio pretendido.

En primer lugar, **opone la excepción de reparación integral por haber sido ya indemnizado el actor.**

Refiere al marco general de los resarcimientos ya otorgados y la complejidad reparatoria.

Afirma que, desde la perspectiva de las víctimas, la reparación de los daños sufridos juega un rol protagónico en el reconocimiento de aquella medida de justicia por tantos años buscada. En este sentido, las negociaciones entre el Estado y las víctimas revelan que tras toda reparación existe una compleja decisión de mover recursos económicos públicos, desde la satisfacción de un tipo de necesidades públicas a la satisfacción de otras radicadas en grupos humanos más específicos. Este concurso de intereses o medida de síntesis se exhibe normalmente en la diversidad de contenidos que las Comisiones de Verdad o Reconciliación proponen como programas de reparación.

Sostiene que estos programas incluyen beneficios educacionales, de salud, gestos simbólicos u otras medidas análogas diversas a la simple entrega de una cantidad de dinero. En este sentido, no es un secreto que las transiciones han estado, en todos los países que las han llevado a cabo, basadas en complejas negociaciones. Basta para ello revisar someramente las discusiones originadas en la aprobación de la Ley N°19.123 para darse cuenta del cúmulo de sensibilidades e intereses en juego en ella.



Indica que la reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos se ha realizado principalmente a través de tres tipos de compensaciones, a saber: a) Reparaciones mediante transferencias directas de dinero; b) Reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas; y c) Reparaciones simbólicas.

Refiere que el actor ha recibido beneficios pecuniarios al amparo de la Ley N°19.992 y sus respectivas modificaciones. Además, se concedió a los beneficiarios, tanto de la Ley 19.234 como de la Ley 19.992, el derecho a gratuidad en las prestaciones médicas otorgadas por el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS) en Servicios de Salud del país. Para acceder a estos servicios la persona debe concurrir al hospital o consultorio de salud correspondiente a su domicilio e inscribirse en la correspondiente oficina del PRAIS.

Afirma que se incluyeron beneficios educacionales consistentes en la continuidad gratuita de estudios básicos, medios o superiores; y también beneficios en vivienda, correspondiente al acceso de subsidios de vivienda.

Asimismo, manifiesta que, parte importante de la reparación por los daños morales causados a las víctimas de DD.HH. se realiza a través de actos positivos de reconocimiento y recuerdo de los hechos que dieron lugar a aquellas violaciones. Este tipo de acciones pretende reparar, ya no a través de un pago de dinero paliativo del dolor –siempre discutible en sus virtudes compensatorias– sino precisamente tratando de entregar una satisfacción a esas víctimas que en parte logre reparar el dolor y la tristeza y con ello reducir el daño moral.

Colige que los esfuerzos del Estado por reparar a las víctimas de derechos humanos, han cumplido todos los estándares internacionales de Justicia Transicional y han provisto indemnizaciones acordes con



nuestra realidad económica que efectivamente han apuntado a compensar a las víctimas por los daños, tanto morales como patrimoniales, sufridos a consecuencia de las violaciones a los derechos humanos.

Manifiesta que, tanto las indemnizaciones que se solicitan en estos autos, como el cúmulo de reparaciones antes indicadas pretenden compensar los mismos daños ocasionados por los mismos hechos. De esta forma, los ya referidos mecanismos de reparación han compensado aquellos daños, no procediendo, por ello, ser compensados nuevamente.

En segundo lugar, **opone la excepción de prescripción de las acciones de indemnización de perjuicios**, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil, en relación con lo dispuesto en el artículo 2497 del mismo cuerpo legal, solicitando que, por encontrarse prescritas, se rechace la demanda en todas sus partes.

Indica que, conforme al relato efectuado por el actor, la detención ilegal, prisión y tortura que sufrió la víctima don Sebastián Alberto Mussa Rodríguez, ocurrió en el año 1974.

Sostiene que, entendiendo suspendida la prescripción durante el período de la dictadura militar, iniciada en septiembre de 1973, por la imposibilidad de las propias víctimas de ejercer las acciones legales correspondientes ante los tribunales de justicia, hasta la restauración de la democracia, a la fecha de notificación de la demanda de autos, esto es, el 1 de diciembre de 2023, igualmente ha transcurrido en exceso el plazo de prescripción extintiva que establece el citado artículo 2332 del Código Civil.

Por lo anterior, el demandado opone la excepción de prescripción de cuatro años establecida en el artículo 2332 del Código Civil y en subsidio, opone la excepción de prescripción extintiva de cinco años contemplada para las acciones y derechos en el artículo 2515, en relación con el artículo 2514 del Código Civil, ya que entre la



fecha en que se habría hecho exigible el derecho a indemnización y la fecha de notificación de la acción civil, habría transcurrido el plazo que establece el citado artículo 2515 del Código Civil.

Advierte que, por regla general, todos los derechos y acciones son prescriptibles, por ende, la imprescriptibilidad es excepcional y requiere siempre declaración explícita, la que en este caso no existe. Pretender que la responsabilidad del Estado sea imprescriptible, sin que exista un texto constitucional o legal expreso que lo disponga, llevaría a situaciones extremadamente graves, absurdas y perturbadoras.

Agrega que la prescripción es una institución universal y de orden público, estando consagrada en las normas del Título XLII del Código Civil, y en especial, las de su Párrafo I, se han estimado siempre de aplicación general a todo el derecho y no solo al derecho privado. Entre estas normas está el artículo 2497 del citado cuerpo legal, que manda aplicar las normas de la prescripción a favor y en contra del Estado, cuyo tenor es el siguiente: *“Las reglas relativas a la prescripción se aplican igualmente a favor y en contra del Estado, de las iglesias, de las municipalidades, de los establecimientos y corporaciones nacionales, y de los individuos particulares que tienen la libre administración de lo suyo”*.

Indica que debe considerarse que, en la especie, se ha ejercido una acción de contenido patrimonial que persigue hacer efectiva la responsabilidad extracontractual del Estado, por lo que no cabe sino aplicar, en materia de prescripción, las normas del Código Civil, lo que no contraría la naturaleza especial de la responsabilidad que se persigue, en atención a que la acción impetrada pertenece -como se ha dicho- al ámbito patrimonial. Para ello, basta considerar que el derecho a indemnización puede ser y ha sido objeto de actos de disposición, tales como renuncia o transacción (incluso en casos de violaciones a los Derechos Humanos), por lo que no existe fundamento plausible para estimar que se trata de acciones ajenas a



la prescripción liberatoria que no es sino una suerte de renuncia tácita por el no ejercicio oportuno de las acciones.

En cuanto a la imprescriptibilidad de la acción patrimonial, destaca que ni la "Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad," ni los "Convenios de Ginebra de 1949," ni la "Resolución N° 3.074 de 1973," ni la "Convención Americana de Derechos Humanos" establecen la imprescriptibilidad para acciones civiles indemnizatorias.

Afirma el demandado que, no habiendo norma expresa de derecho internacional de derechos humanos, debidamente incorporada a nuestro ordenamiento jurídico interno, que disponga la imprescriptibilidad de la obligación estatal de indemnizar, y no pudiendo tampoco aplicarse por analogía la imprescriptibilidad penal en materia civil, no se puede apartar del claro mandato de la ley interna al resolver esta contienda y aplicar las normas contenidas en los artículos 2332 y 2497 del Código Civil, que establecen las reglas sobre prescriptibilidad de la responsabilidad patrimonial del Estado.

En subsidio de las defensas y excepciones precedentes, formula las siguientes alegaciones en cuanto a la naturaleza de la indemnización solicitada y el excesivo monto pretendido de \$150.000.000 para la víctima directa.

Indica que el daño moral, consiste en la lesión o detrimento que experimenta una persona, en general, en sus atributos o cualidades inmateriales. De esta forma, los llamados daños no patrimoniales recaen sobre elementos de difícil o imposible estimación pecuniaria, ya que su contenido no es económico, o al menos no directamente.

Sostiene que la indemnización de perjuicios tiene por objeto restablecer el equilibrio destruido por el hecho ilícito, otorgando a la víctima un valor equivalente a la cuantía del daño sufrido, para ponerla en el mismo estado que tenía antes del acto dañoso. Por lo que ésta no se determina cuantificando, en términos económicos, el valor de la



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: EXZXXSMJWJS

pérdida o lesión experimentada, sino solo otorgando a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio que le permita atenuar el daño, morigerarlo o hacerlo más soportable, mediante una cantidad de dinero u otro medio, que en su monto o valor sea compatible con esa finalidad meramente satisfactiva.

Por otra parte, advierte que tampoco resulta procedente invocar la capacidad económica del demandante y/o del demandado como elemento para fijar la cuantía de la indemnización, pues, como se ha dicho, el juez sólo está obligado a atenerse a la extensión del daño sufrido por la víctima, en la cual no tienen influencia estas capacidades.

No habiendo norma legal que establezca una excepción relativa a la capacidad económica habrá de estarse al principio general y básico de la cuantificación conforme a la extensión del daño, ni más ni menos, con absoluta prescindencia del patrimonio del obligado al pago. En tal sentido, las idénticas cifras pretendidas en la demanda como compensación del daño moral resultan excesivas teniendo en consideración las acciones y medidas de reparación adoptadas por el Estado de Chile en esta materia, y los montos promedios fijados por nuestros tribunales de justicia, que en esta materia han actuado con mucha prudencia.

En subsidio de las excepciones precedentes, la regulación del daño moral debe considerar los pagos ya recibidos por el Estado y guardar armonía con los montos establecidos por los Tribunales.

Sostiene que deben considerarse todos los pagos recibidos por los actores de conformidad a las leyes de reparación y que seguirán percibiendo a título de pensión, conjuntamente a los beneficios extrapatrimoniales, puesto que todos ellos tienen por objeto reparar el daño moral.



Concluye señalando que, de no accederse a la petición, implicaría un doble pago por un mismo hecho, contraviniendo los principios jurídicos básicos del derecho en orden a que no es jurídicamente procedente que un daño sea indemnizado dos veces.

Finalmente, alega que los reajustes sólo pueden devengarse en el caso que la sentencia acoja la demanda y establezca esta obligación, y además desde que dicha sentencia se encuentre firme o ejecutoriada y mientras el demandado se encuentre en mora.

Con fecha 31 de enero de 2024 el Tribunal tuvo por evacuada la réplica de forma extemporánea.

Con fecha 7 de febrero de 2024, el demandado evacuó el trámite de la dúplica, reiterando sus defensas expresadas en el escrito de contestación.

Con fecha 6 de marzo de 2024, se recibió la causa a prueba.

Con fecha 24 de septiembre de 2024, se citó a las partes para oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que don Sebastián Alberto Mussa Rodríguez interpuso demanda de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile, todos ya individualizados, con base en los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho latamente consignados en lo expositivo de la presente sentencia.

SEGUNDO: Que la parte demandada contestó el libelo, pidiendo su rechazo, al tenor de lo narrado en lo expositivo de este fallo.

TERCERO: Que se fijaron los siguientes hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, respecto de los cuales debía recaer la prueba:



1. Efectividad que la demandante ha sufrido los perjuicios descritos en el libelo pretensor. En la afirmativa, naturaleza y monto de los perjuicios;
2. En su caso, efectividad que dichos perjuicios son imputables al actuar de la demandada;
3. Relación de causalidad entre el actuar de la demandada y los perjuicios demandados;
4. Efectividad que la demandante fue reparada por el daño extrapatrimonial alegado. En la afirmativa, tipo de reparación obtenida y efectividad de ser satisfactiva.

CUARTO: Que, a fin de acreditar sus asertos, la parte demandante acompañó a folio 24, los siguientes documentos:

1. Certificado emitido con fecha 21 de noviembre de 2022 por doña Marcela Cerda González, del Área Memoria, Archivos y Documentación del Instituto Nacional de Derechos Humanos, indicando que don Sebastián Alberto Mussa Rodríguez se encuentra calificado como víctima en el listado de Prisioneros Políticos y Torturados, bajo el número 5.882;
2. Copia simple de la capeta de antecedentes de la Comisión Valech II, correspondiente a don Sebastián Alberto Mussa Rodríguez;
3. Certificado N° 110, emitido en el mes de agosto de 2023, por el Servicio Salud Arica, Subdirección de gestión asistencial, Equipo PRAIS, respecto de don Sebastián Alberto Mussa Rodríguez.

QUINTO: Que la demandada solicitó oficiar al Instituto de Previsión Social (IPS) a fin de que informara todos los beneficios reparatorios del Estado y los montos totales que ha obtenido el actor, recibiendo respuesta de tal institución el 11 de enero de 2024, agregada a folio 13.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: EXZXXSMJWJS

SEXTO: Que son hechos pacíficos en la presente causa, por no haber mediado controversia entre las partes, los siguientes:

1.- Que el día 4 de noviembre de 1974, don Sebastián Alberto Mussa Rodríguez fue detenido.

2.- Que el actor permaneció privado de libertad hasta el 11 de noviembre de 1974.

3.- Que durante todo el tiempo que permaneció como prisionero político, fue objeto de apremios físicos, psicológicos y torturas de diversa entidad.

4.- Que el actor ha sido reconocido como víctima en el Listado de Prisioneros Políticos y Torturados, elaborado por la Comisión Asesora Presidencial para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctima de Prisión Política y Tortura, bajo el número de registro 5.882.

SÉPTIMO: Que la presente acción corresponde a una demanda de indemnización de perjuicios, deducida por don Sebastián Alberto Mussa Rodríguez en contra del Fisco de Chile, por el daño moral sufrido en su calidad de víctima de prisión política y tortura durante el régimen militar.

En consecuencia, junto con analizar si concurren los requisitos para acoger la pretensión del actor, es procedente referirse previamente a las defensas esgrimidas por el demandado, las que se circunscriben a la reparación integral por haber sido ya indemnizado el demandante y a la prescripción.

OCTAVO: Que, en efecto, alega la demandada que el actor ya se encontraría indemnizado de los perjuicios padecidos, por haber recibido su reparación integral mediante transferencias de dinero, beneficios de salud (PRAIS) y gestos simbólicos, de manera que, al haberse compensado los daños morales sufridos, no pueden ser exigidos nuevamente.



NOVENO: Que conforme a lo consignado en el oficio ORD DSGT N° 18767/2024 de 9 de enero de 2024, suscrito por el Jefe de Departamento Secretaría General y Transparencia del Instituto de Previsión Social, consta que el demandante ha recibido como reparación la cantidad total de \$27.974.526, suma de la cual \$26.477.125 corresponden a pensión por beneficio Ley N° 19.992; \$1.000.000 por aporte único Ley N° 20.874 y \$497.401 por concepto de aguinaldos, siendo su pensión mensual actual de \$242.262.

DÉCIMO: Que las transferencias de dinero realizadas al actor, los beneficios de salud y las reparaciones simbólicas a que alude la demandada, no conllevan –necesariamente- la reparación íntegra de los daños padecidos por el actor en su calidad de víctima de prisión política y tortura, y que el Estado de Chile se encuentra obligado a proporcionar.

En efecto, el propio artículo 24 de la Ley N° 19.123 prescribe en su inciso primero que: *“La pensión de reparación será compatible con cualquiera otra, de cualquier carácter, de que goce o que pudiere corresponder al respectivo beneficiario”*, reconociendo que éste puede obtener otras reparaciones, como sería aquella decretada, de ser procedente, por los tribunales de justicia vía acción indemnizatoria.

Lo anterior, se fundamenta considerando que las reparaciones otorgadas por la legislación, han sido concedidas y determinadas por el propio Estado, en términos generales y únicos a las víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus familiares, de manera que su efecto reparador no necesariamente es pleno.

Que, además, los beneficios otorgados por la Ley N°19.123, dicen relación más bien con prestaciones de carácter asistencial y patrimonial, lo que marca una diferencia ostensible con la reparación del daño moral. Así, las pensiones mensuales de reparación, la bonificación compensatoria, los beneficios médicos y educacionales, guardan una mayor armonía con los conceptos de daño emergente y



lucro cesante, de manera que de estimarse y probarse que el daño moral inferido excede las mencionadas pensiones o es independiente a ellas, no existe razón suficiente como para, de antemano, rechazar la demanda.

Que en el mismo sentido se viene pronunciando la jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia: *“La normativa invocada por el Fisco – que sólo establece un sistema de pensiones asistenciales- no contempla incompatibilidad alguna con las indemnizaciones que aquí se persiguen y no es procedente suponer que ella se dictó para reparar todo daño moral inferido producto de atentados a los derechos humanos, ya que se trata de formas distintas de reparación, y que las asuma el Estado voluntariamente, como es el caso de la legislación en que se asila el demandado, no importa la renuncia de una de las partes o la prohibición para que el sistema jurisdiccional declare su procedencia, por los medios que autoriza la ley”* (Sentencia Excma. Corte Suprema en causa Rol N° 12.636-2018).

Conforme a lo que se ha venido exponiendo, cabe desestimar la excepción de reparación integral opuesta por el demandado.

UNDÉCIMO: Que respecto a la excepción de prescripción extintiva, el Fisco de Chile indica que entre la fecha en que se hizo exigible la indemnización y la fecha de notificación de la acción, ha transcurrido en exceso el plazo de cuatro años que contempla el artículo 2332 del Código Civil, por tratarse de una materia de responsabilidad extracontractual; y en subsidio, en caso que se estime que la norma anterior no es aplicable al caso de autos, opone la excepción de prescripción extintiva de cinco años contemplada para las acciones y derechos en el artículo 2515 relación al artículo 2514, ambos del Código Civil.

DUODÉCIMO: Que la excepción de prescripción opuesta lleva a cuestionarse si la acción civil que deriva de un delito de lesa humanidad, se sujeta a las normas internas que rigen en el ámbito



patrimonial donde está consagrada esta institución, o bien, por el contrario, y por la trascendencia de la materia en discusión, escapa de la reglamentación interna, sometiéndose a una normativa supralegal e internacional, relativa a los Derechos Humanos.

Tal controversia –y la postura que se adopte- no resulta baladí. En efecto, de estimarse que la prescripción opera íntegramente en estos casos, la acción civil derivada de dichos ilícitos podría prescribir al transcurrir cinco años de cometidos los hechos, o desde la fecha en que existiera certeza que el actor pudo ejercer la acción. A la inversa, de considerarse que la reglamentación patrimonial es inaplicable, la acción civil sería imprescriptible.

DÉCIMO TERCERO: Que, para zanjar tal problemática, es necesario considerar que si bien no existe norma -ni nacional ni internacional- que se pronuncie derechamente sobre el particular, este silencio legal no es compartido en lo relativo a la acción penal derivada de esta clase de delitos, en que claramente se ha establecido que dicha acción es imprescriptible (a modo ejemplar la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad).

Esta postura, determinante en el ámbito penal, se justifica comprendiendo la gravedad de las conductas que se persigue sancionar, consistente en la maquinación coordinada de los agentes del Estado en desmedro de los derechos fundamentales de las personas.

Ahora, si bien no existe dicho dictamen en el área civil, el mismo fundamento puede extrapolarse a este ámbito. Más aún, los tratados internacionales relativos a Derechos Humanos integrados a nuestra normativa conforme al inciso segundo del artículo 5º de la Carta Fundamental, y la propia legislación interna dictada a consecuencia de dichos crímenes, propenden a una reparación integral tanto de sus víctimas como de sus familiares, lo que necesariamente incluye el



resarcimiento monetario, el que por derivar de un delito de lesa humanidad, trasciende su naturaleza meramente patrimonial, marcando un contraste con el ilícito civil común.

Así las cosas, la reparación integral que se persigue para aquellos que han sido víctimas de los actos ejecutados por el Estado de Chile en tiempos del régimen militar, debe incluir tanto una persecución penal y un resarcimiento civil que no esté condicionado por el transcurso del tiempo. Solo así, una vez indemnizadas todas aquellas personas que fueron afectadas en dicho período por actos de agentes del Estado, se cumplirá con aquella reparación completa a que Chile se ha comprometido tanto internacionalmente como ante el propio país.

DÉCIMO CUARTO: Que en este mismo sentido se ha pronunciado la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, al consignar: *“en el caso de delitos de lesa humanidad, como el que sustenta la demanda de los actores, siendo la acción penal persecutoria imprescriptible, no resulta coherente entender que la acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre prescripción contenidas en la ley civil interna, ya que ello contraría la voluntad expresa manifestada por la normativa internacional sobre Derechos Humanos, integrante del ordenamiento jurídico nacional de acuerdo con el inciso segundo del artículo 5º de la Carta Fundamental, que consagra el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener la reparación integral de todos los perjuicios sufridos a consecuencia del acto ilícito, e incluso por el propio derecho interno, ...”* (Sentencia Excma. Corte Suprema, Rol N°12.636-2018).

Con todo lo dicho, dada la naturaleza y contexto de los ilícitos fundantes, esta magistrada se inclina por la postura de una imprescriptibilidad no solo penal, sino también civil, lo que conducirá al rechazo de la excepción de prescripción opuesta.



DÉCIMO QUINTO: Que, ahora, entrando en el fondo de la discusión de estos autos, cabe reiterar que don Sebastián Alberto Mussa Rodríguez, demanda indemnización de perjuicios por el daño moral sufrido, con ocasión de la detención y torturas de que fue objeto, por parte de agentes del Estado, hecho indiscutido y no desconocido por la demandada, siendo incluso calificado como víctima del listado de prisioneros políticos y torturados.

Luego, siendo inconcuso el hecho dañoso del que deriva la responsabilidad del Estado hecha valer, cabe centrarse en la demostración del detrimento moral alegado por el actor.

DÉCIMO SEXTO: Que el daño moral es, en términos generales, el menoscabo o agravio a un derecho subjetivo de carácter inmaterial o inherente a la persona y que es imputable a dolo o culpa de otro, que estaba obligado a respetarlo, en la especie, el Estado de Chile.

El daño moral tiene su causa en la transgresión al ordenamiento jurídico y su consecuencia es el sufrimiento causado en la víctima, producto de la limitación a un interés legítimo. Así, la persona titular de un derecho subjetivo o de un bien jurídico, al ser despojada de su legítimo goce, se le priva de su ejercicio y sufre como consecuencia un daño extrapatrimonial.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que el daño moral debe ser probado por quien lo reclama, desde que éste constituye un presupuesto para el origen de la responsabilidad civil.

DÉCIMO OCTAVO: Que si bien la demandada no ha cuestionado la configuración del daño moral padecido por el actor - sino únicamente la procedencia o cuantía de la suma pedida a su respecto-, la parte demandante rindió prueba documental para justificar la indemnización por daño moral solicitada.

En ese sentido, se destaca el informe realizado por doña Jeannette Valenzuela Navarrete, psicóloga y Viviana Abarca González, coordinadora, del Programa PRAIS Arica, elaborado en el mes de



agosto de 2023, respecto de don Sebastián Alberto Mussa Rodríguez, indicando que éste presenta secuelas producto de la detención y tortura ocurrida durante la dictadura.

DÉCIMO NOVENO: Que el informe psicológico indicado, permite concluir que la vida del actor fue alterada como consecuencia de la detención política y torturas a las que fue sometido, presentando incluso, actualmente, secuelas psicológicas.

VIGÉSIMO: Que correspondiendo evaluar prudencialmente el daño moral padecido por el actor, considerando, principalmente, la entidad de las secuelas psicológicas acreditadas, la duración de la privación de libertad a que se vio sometido -ocho días- y la reparación pecuniaria ya recibida por parte del Estado este será estimado en la suma de \$20.000.000 (veinte millones de pesos).

VIGÉSIMO PRIMERO: Que la suma mencionada será reajustada conforme a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor desde la fecha que el fallo se encuentre ejecutoriado y devengará intereses corrientes desde que la demandada incurra en mora.

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que atendido lo dispuesto en el artículo 144 del Código de Procedimiento Civil, estimando que la demandada ha tenido motivo plausible para litigar, se le eximirá del pago de las costas.

Por estas consideraciones, y teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 47, 222, 224, 236, 1437, 1700, 1706, 2492 y 2518 del Código Civil; artículos 144, 160, 170, 342, 346, 384, 426, 427 y 428 del Código de Procedimiento Civil, se declara:

- I. **Que se rechazan las excepciones de reparación integral y prescripción.**
- II. **Que se acoge la demanda de indemnización de perjuicios deducida, solo en cuanto se condena al Fisco de Chile a**



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: EXZXXSMJWJS

pagar a don Sebastián Alberto Mussa Rodríguez la suma de \$20.000.000 (veinte millones de pesos) a título de daño moral.

- III. Que la cantidad mencionada se reajustará conforme a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor desde la fecha que el fallo se encuentre ejecutoriado, y devengará intereses corrientes desde que la demandada se constituya en mora.**
- IV. Que no se condena en costas a la demandada por estimar que tuvo motivo plausible para litigar.**

Notifíquese, regístrese y archívese en su oportunidad.

ROL N° C – 18.708 - 2023

Pronunciada por doña Daniela Royer Faúndez, Juez Titular del Trigésimo Juzgado Civil de Santiago.

En Santiago, a diez de febrero de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario, la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: EXZXXSMJWJS